

La profundidad de la crisis que vivimos nos impulsa a dirigirles esta carta.

No apelamos a vuestro carácter de miembros o partidarios de un gobierno, lo que es estrictamente transitorio; nos dirigimos a ustedes en cuanto responsables de organismos permanentes del Estado chileno, cuya obligación es anteponer los intereses de la Patria al fervor o la pasión por sus particulares posiciones políticas contingentes.

En contraparte, nuestra apelación no es tampoco -obviamente- en nombre de ninguna ideología o posición partidaria. Postulamos que la ciudadanía les ha entregado las armas para defender al conjunto de la Nación y no a una parte de ella contra las demás; y somos los primeros en exigirnos consecuencia con este principio, como la exigimos también de ustedes.

Pensamos que hoy día está comprometido el futuro de la Nación entera; y que para enfrentar esta situación, es indispensable un decidido esfuerzo de unidad de todos los chilenos.

Los datos de la crisis económica son claros. Más allá de las opiniones que se puedan sostener sobre sus responsables y sus causas, materias sobre las que juzgará desapasionadamente la historia, es un hecho que tenemos una deuda externa cercana a los veinte mil millones de dólares; que, a diferencia de otras naciones del continente, no utilizamos en su momento esos recursos para incrementar nuestra capacidad y eficiencia productivas; por el contrario, los perdimos en una expansión desenfrenada del consumo y las especulaciones financieras; que nuestra infraestructura industrial ha sufrido un grave deterioro y en muchos sectores muestra signos claros de obsolescencia; que nuestra capacidad para incrementar exportaciones es muy limitada, y en consecuencia no podemos dar una solución real al problema de la deuda sino sólo postergarlo y agravarlo más hacia el futuro. Que la inversión extranjera no ha llegado sino en monto mínimo, mientras la inversión interna -pública y privada- ha sido en estos años la más baja en medio siglo. En términos sintéticos, el crecimiento económico anual per cápita en los últimos once años ha sido igual a cero.

El problema social es también de extrema gravedad. El déficit habitacional se ha venido acumulando y alcanza ya las ochocientas mil viviendas. La retención del sistema escolar es cada día más débil y la cobertura relativa de la matrícula secundaria y universitaria ha descendido consistentemente. Ha recrudecido nuevamente la incidencia de las enfermedades infecto-contagiosas características de situaciones extremas de pobreza, incluso de algunas que hace una década se consideraban erradicadas. Por su magnitud y duración, el desempleo ha desbordado el campo de la economía y ha pasado a convertirse en una cuestión de integración nacional. Una profunda escisión atraviesa a la sociedad en dos segmentos: los que permanecen ligados de algún modo a la actividad económica y los que han sido excluidos y empujados hacia la marginalidad -entre los cuales las dos terceras partes de nuestros jóvenes-. Al amparo de esta situación crecen las lacras de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y la mendicidad.

Una simple constatación sirve para sintetizar lo dicho más arriba: hasta hace una década atrás, los organismos económicos, técnicos o académicos internacionales clasificaban a Chile, por su nivel de desarrollo social y económico, en un mismo grupo con los países del Plata; hoy día, atendiendo a los mismos criterios, lo clasifican en el tercer o cuarto grupo conformado junto a nuestro país por otros países andinos, a menudo más pequeños y caracterizados por su secular desintegración social.

Lo que estamos viviendo no es ni una agresión desde el exterior, ni una situación pre-revolucionaria; ustedes saben bien que tampoco es el prelude del "despegue": es, simplemente un acelerado proceso de decadencia y descomposición nacional.

En gran medida, ello es resultado de que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de superar el conflicto social y político que atascó el curso de nuestro desarrollo a comienzos de los años setenta. Por el contrario, estos años han servido para exacerbarlo, profundizarlo, ampliarlo y hacerlo cada vez más difícil de remontar. El país debe hacer así un titánico es -

fuerzo mientras se desangra internamente y se le impide restañar sus heridas.

Porque junto a la crisis económica y social constatamos que los canales de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas están cerrados, intervenidos o prohibidos; que las organizaciones sociales o políticas se ven impedidas, bajo sospecha de sedición, de concertar un acuerdo de largo plazo que permita fundar un orden estable y aceptado para el futuro; que el descontento con las políticas gubernamentales es generalizado, mientras el gobierno se niega a todo diálogo con la Oposición, o lo reduce a un pequeño juego de astucias, y hace oídos sordos a cualquier proposición que provenga de ella; que en ese contexto la división política del país es cada día más profunda, lo que lleva a un peligroso ascenso a los extremos en que los sucesos de violencia son cada vez más recurrentes y la acción represiva del Estado se distancia de lo policial y se acerca cada vez más a lo bélico.

Señores Jefes de la Defensa Nacional: "Creemos muy sinceramente que la Patria está en peligro; que este peligro es el más difícil de reconocer, pero al mismo tiempo el más dañino porque el enemigo no está al frente sino dentro de nosotros: es la decadencia; la auto-aniquilación; la trágica fatalidad de ser incapaces de poner fin a una dinámica de enfrentamiento y conflagración interna.

Frente a este enemigo, estamos ciertos, resulta inútil luchar por las armas. Por el contrario, estamos convencidos que el primer paso hacia una salida consiste en que no se haga uso político de ellas. " *Unfe reconocer, antes*

El segundo paso es reconocer que, si la salida no es armada, se requiere un diálogo entre ^{la Fuerza Armada, sustentando el sistema,} el gobierno y la Oposición que puede conducir a entendimientos progresivos en torno a las instituciones y normas de regulación de los conflictos.

El tercer paso es la construcción de un consenso nacional básico que permita a los chilenos mirar hacia el futuro en lugar de seguir enredados eternamente en discusiones y conflictos del pasado.

Y que sea demasiado tarde, que la política actual está provocando el polarización entre el gobierno y la Oposición, lo que beneficia a las posiciones que no están abiertas en un nivel de diálogo pacífico, por ambas son contradictorias

Ello requiere a nuestro juicio de una reforma de las instituciones y una renovación de las autoridades políticas, por medio de un pronunciamiento claro e indesmentible del poder soberano de la Nación; esto es, del pueblo chileno en edad de votar. Con el fin de avanzar efectivamente por este medio hacia la construcción de un consenso nacional básico, proponemos que las autoridades políticas superiores sean elegidas por esta vez, ^{Simultáneamente.} con el sistema de doble vuelta electoral, sólo si reúnen al menos los dos tercios de los votos válidamente emitidos (permaneciendo en sus cargos las autoridades actuales correspondientes en caso de no lograr esta proporción ningún candidato). Pensamos que la renovación de autoridades políticas debe darse a todo nivel y en todo el país.

Sabemos que ante una proposición como ésta se ven ustedes constreñidos por el juramento de lealtad que hicieron a la Constitución de 1980. Más allá de nuestro profundo desacuerdo con las disposiciones de esa Carta y con la forma en que discutida y aprobada, pensamos sin embargo que ella misma proporciona mecanismos de reforma que pueden ser seguidos si existe la voluntad de hacerlo.

4
Creemos llegada la hora de un diálogo franco, abierto y constructivo entre civiles y militares. En la medida en que mantienen el monopolio de la fuerza física, es indudable que los militares pueden negarse permanentemente al diálogo y permanecer en el poder por largos plazos. Ello puede ser, sin embargo, trágico para la Nación y para las mismas instituciones castrenses, en la medida que significa el ahondamiento de las actuales heridas que laceran a la sociedad chilena.

Confiamos en el patriotismo de los hombres de armas para reflexionar sobre la situación actual del país y lo que la historia les demanda. Más allá de temores o intereses; ambiciones o suspicacias; espíritus de corporación o de partido, estamos ciertos que es posible, en el amor a la Patria por sobre todas las cosas, encontrar una respuesta común al angustioso presente de Chile.

Santiago, 29 de Noviembre de 1984

Santiago, diciembre de 1984.

Señor Mayor General Enrique Valdés Puga
Jefe del Estado Mayor General del Ejército
Vidaurre 1452
Santiago.

Señor Vicealmirante Germán Guesalaga Toro
Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Gálvez 45;7o. piso
Santiago.

Señor General de Aviación Carlos Desgroux Camus
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Ministerio de Defensa Nacional; Plaza Bulnes s/n
Santiago.

De nuestra consideración:

Preocupados por la gravedad de la crisis nacional en curso, cuyo alcance afecta a la sociedad en su conjunto, a la economía, a las relaciones internacionales, a la capacidad de defensa del país, a la cultura, a la moral y, en suma, a lo más profundo de la chilenidad, poniendo en riesgo nuestra integridad como nación y como Estado; nos permitimos dirigirnos a usted y, por su intermedio, a la institución a que pertenece con el fin de proponer una alternativa de solución preservadora de la paz, el orden y la seguridad entre todos los chilenos.

Se ha generado en nuestro país una situación explosiva y crecientemente incontrolable para el gobierno como resultado de la ausencia, durante ya más de once años, de mecanismos que regulen y resuelvan democrática, sustantiva y pacíficamente los conflictos sociales y políticos derivados de la aplicación de una receta económica de inspiración extranjera, profundamente perjudicial para la empresa nacional y los sectores medios y populares, y de un modelo político fundado en la idea del estado de guerra interior permanente entre el gobierno y el pueblo de Chile. Dicha situación se ha agudizado como consecuencia de la falta de una institucionalidad consensualmente aceptada como legítima y válida por la generalidad de los chilenos.

El descontento creado por la aplicación de esas recetas y modelos, y la inexistencia de una real democracia que lo canalizara, llevaron a que Chile reaccionara exigiendo el término del gobierno por los únicos medios a su alcance: la protesta pacífica y el paro de labores.

Para contener la manifestación generalizada de críticas a esa su gestión, el gobierno del general Pinochet decretó el Estado de Sitio pre-textando el combate al terrorismo, en circunstancias de que para ello precisamente fue que recién ~~se~~ promulgó una ley que da amplias facultades a los organismos responsables de esa tarea. En realidad, el fin del Estado de Sitio es amedrentar a la población y condicionar un diálogo con sectores políticos que supone proclives a aceptar sus propuestas de itinerario hasta 1989.

~~El~~ Uno y otro propósito difícilmente se verán cumplidos, siendo más probables el aumento de la explosividad social, la agudización de la crisis nacional en todos sus aspectos y el ahondamiento del encono político entre gobierno y oposición.

El Estado de Sitio y las medidas represivas que le acompañan no resuelven los problemas de fondo que dieron lugar a la conmoción social y política en desarrollo, ni ofrecen cauce de salida al conflicto que hoy vive la patria. Más bien dejan las cosas iguales, con la perspectiva de convertirlas en nuevos factores de acumulación de tensiones desintegradoras del país.

Con el propósito de terminar con esta lógica de enfrentamiento entre compatriotas y de proporcionar canales adecuados para un reencuentro nacional, para la pacificación de los espíritus restableciendo la concordia interna y para el logro de una convivencia civilizada como necesaria base en la búsqueda de soluciones de fondo a la crisis actual, proponemos las siguientes medidas:

1. Derogación inmediata del Estado de Sitio y de las decisiones represivas adoptadas bajo su vigencia, y
2. Convocatoria a un plebiscito entre los chilenos, a realizarse a más tardar el 15 de abril próximo, en el cual aquellos se pronuncien sobre:
 - a. Si están por aceptar la legitimidad y validez de la Constitución promulgada por el gobierno en 1980, y por aceptar la permanencia del general Pinochet como Presidente de la República hasta 1989, ó
 - b. Si están por la instalación, en mayo próximo, de un gobierno provisional presidido por don Rafael Retamal y, además, integrado por los señores Francisco Bulnes, Raúl Silva Henríquez, Jaime Castillo Velasco y Carlos Briones, y por los actuales comandantes en jefe subrogantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea; cuya misión ejecutiva se ceñirá a las facultades que a este poder le otorga la Constitución de 1925 y cuyo mandato durará 18 meses desde su instalación; en el curso de los cuales convocará primero a elecciones de un Congreso con facultades constituyentes-que se ocupará exclusivamente de discutir y formular la nueva Constitución de Chile- y, en seguida, a elecciones presidenciales donde el pueblo soberanamente resuelva sobre el primer gobierno constitucional.

Ciertamente, estos pasos son más eficaces para conquistar una solución de fondo, pacífica, ordenada y comprometedora de la voluntad de Chile, que las actuales medidas de fuerza del gobierno, cuyo horizonte es un pronto descrédito por su carencia de propuestas perspectivas y por echar petróleo a la hoguera ya encendida en el país. La protesta nacional de los días 27 y 28 de noviembre prueban la ineficacia del Estado de Sitio y que los chilenos ya no se dejan amilanar con las medidas de fuerza del gobierno.

Seguramente, por haber osado dirigirnos a usted, seremos acusados de sedición. En realidad lo hemos hecho por entender que la opinión y la acción de vuestra institución es lo fundamental en la toma de decisiones de un gobierno que se define como de las Fuerzas Armadas, y porque, cancelados todos los caminos de expresión ciudadana frente al poder, naturalmente el sentido común aconseja apelar a los centros reales de decisión del Estado.

Conscientes de que lo importante hoy son los intereses superiores de la nación en jaque, estamos resueltos a asumir todas las responsabilidades, sacrificios y riesgos derivados de la necesidad de actuar con rapidez, sensatez y firmeza.

Si en verdad todos manifestamos ser portadores de una vocación auténticamente democrática y deseamos buscar una salida pacífica y en orden, aceptemos pues la idea de que sea el pueblo de Chile quien decida libre, informada y soberanamente sobre su destino. No darle a los chilenos esa oportunidad, aparte de evidenciar una actitud no democrática, siembra las semillas de un gran colapso nacional.

En todo lo que diga relación con hacer viable esta proposición, estamos dispuestos a entablar conversaciones con los destinatarios principales de esta carta. Sabemos que ello nos acarreará altos costos políticos y morales por la historia reciente de nuestra patria, que abrió profundas heridas en nuestro ser nacional. A pesar de ello estamos resueltos a avanzar en esta salida, en la medida que es la única conducente a puerto seguro para Chile.

El destinatario fundamental de ésta son las FF.AA. Sin embargo, el imperativo de ofrecer esperanza a los chilenos y de ofrecer transparencia a la actividad política, tan atacada en estos casi 12 años de oscu-

rantismo e imperio del secreto en la gestión gubernativa, nos llevan a pu
blicitarla a través de los medios que resuelvan acogerla y a entregarla
a las instancias, personalidades, organizaciones políticas y sociales, na-
cionales e internacionales que estimamos convenientes.

Le saludan atentamente

Andrés Allamand
Presidente del
Movimiento de U-
nión Nacional.

Ricardo Lagos Ricardo Núñez
Presidente de Coordinador del
la Alianza De- Bloque Socialis
mocrática. ta.

Manuel Almeyda
Presidente del
Movimiento De-
mocrático Popu
lar.

Carmen Sáenz de Phillips
Presidente del Partido
Nacional